

Chapter Title: INTRODUCCIÓN EL PERSISTENTE RETROCESO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Chapter Author(s): Ramón Romero

Book Title: Antología del pensamiento hondureño contemporáneo

Book Editor(s): Ramón Romero

Published by: CLACSO

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0kc9.3>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



This content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



CLACSO is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Antología del pensamiento hondureño contemporáneo*

JSTOR

INTRODUCCIÓN

EL PERSISTENTE RETROCESO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ramón Romero

HONDURAS HOY

Honduras, un país con 112,492 kilómetros cuadrados y un aproximado de 9.3 millones de habitantes, vive una de las más adversas condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en su historia. Se encuentra entre los países que enfrentan los peores escenarios en América Latina. La pobreza está en constante aumento. Las grandes mayorías están desempleadas o subempleadas y empeorando su calidad de vida. La economía está cada vez más lejos de satisfacer las necesidades básicas de la población, a pesar de sus muy leves crecimientos. El Estado subsiste con instituciones cada vez más debilitadas, bajo la poderosa influencia de las élites económico-políticas. Están agotadas casi por completo las actuales condiciones de gobernabilidad democrática. En política exterior el Estado mantiene su tradicional subordinación a los Estados Unidos. El endeudamiento externo es mayor que a principios del siglo XXI, después que tal deuda fue condonada en su casi totalidad. La cooperación internacional, que hace mucho tiempo se volvió un componente indispensable de la economía, disminuye progresivamente sus flujos ante las evidencias de corrupción y mal uso de sus recursos. A continuación se muestran cifras sobre estos y otros problemas.¹

1 En Honduras la información censal oficial se obtiene, en su mayoría, por proyecciones estadísticas sobre información obtenida años atrás.

En el año 2013 el 64.5% de la población total de Honduras vivió en condiciones de pobreza, y dentro de este porcentaje, el 42.6% en extrema pobreza; en 2015 la pobreza total fue de 63,8% y la extrema pobreza fue 40.0%; en 2017 la pobreza total ha sido de 63.8% y la extrema pobreza 40.7%.² El nivel de pobreza y extrema pobreza en Honduras es, con mucho, el más elevado de Centroamérica.

Una causa decisiva de la pobreza es el desempleo y subempleo. La tasa de desempleo abierto y subempleo en el año 2015 fue del 62.5% de la población; en 2016, 63.1%; en 2017, 62.7%.³ Esta es la tasa más alta de desempleo y subempleo de Centroamérica.

La inseguridad es otro de los grandes problemas que enfrenta la mayoría de la población. El número de homicidios por cada 100,000 habitantes, en el año 2013 fue de 79.0; en el 2015 fue 60.0; en 2017, 44.0.⁴ El número de feminicidios en 2016 fue de 465, que es el mayor en América Latina, seguido por El Salvador, con 349, Argentina con 254 y Guatemala con 211.⁵

Pobreza, desempleo e inseguridad son factores que estimulan la migración hacia los Estados Unidos y varios países europeos. Los migrantes, en su mayoría jóvenes, provienen de estratos pobres y emigran buscando mejores condiciones de vida en otros países. En Estados Unidos hay más de un millón de hondureños, que permanecen indocumentados y constituyen mano de obra poco calificada. El endurecimiento de las políticas anti inmigración en aquel país es una seria amenaza para ellos, para sus familiares en Honduras que reciben las remesas que aquellos envían, y para la economía nacional, que en buena parte está apuntalada con las remesas. De Centroamérica, Honduras es el segundo país mayor receptor de remesas familiares, solo superado por El Salvador. Las remesas -que también provienen de varios países europeos, especialmente de España- operan como paliativos a la pobreza y dinamizadores de la economía interna y del comercio de importaciones. En el año 2013 las remesas familiares llegadas a Honduras tuvieron un monto total de 3,093.3 millones de US dólares; en el 2015 su monto ascendió a 3,726.7 millones y en 2017 a 4,305.3 Millones.⁶ En tales condiciones, el crecimiento económico fue 2.8% en 2013, 3.8% en 2015 y 4.8% en 2017, proyectado a 3.9% en

2 Encuesta Permanente de hogares, Instituto Nacional de Estadísticas.

3 Instituto Nacional de Estadísticas.

4 *Insight Crime* y datos oficiales.

5 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

6 Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y Banco Central de Honduras.

2018.⁷ Sin embargo, el crecimiento económico se ve afectado por la inflación en cuanto al beneficio que dicho crecimiento pueda generar a la población. En este sentido, la inflación es considerada un cruel impuesto a la población. Honduras ha tenido tasas de inflación de 5% en 2013, 2.3% en 2015 y 4.8% en 2017.⁸ Un gran determinante de los niveles o tasas de inflación es el precio de los combustibles, que en se incrementa más por razón de la elevación de los impuestos al mismo, que por el aumento de su precio en el mercado internacional. En otras palabras, el elevado impuesto a los combustibles es un factor que genera inflación.

La balanza comercial, tradicionalmente deficitaria, fue de -20.6% del PIB en 2013; de -16.2 en 2015, y -14.1 en 2017,⁹ demostrando una leve tendencia a reducir la diferencia ente lo que se importa y lo exportado. Esta tendencia a la reducción ha tenido como factor principal el creciente y sostenido aumento en cantidad y calidad del café exportado. El café es actualmente el primer producto de exportación de Honduras. Una característica de la producción de café es que en su mayoría está en manos de más de 100,000 pequeños productores, dando lugar a una más justa distribución del ingreso. Además existen empresas y cooperativas de pequeños productores, como Café Orgánico Marcala (COMSA) y la cooperativa CAPUCAS, que procesan y exportan café de muy alta calidad, sin intermediarios, con sellos orgánicos, de comercio justo y una denominación de origen, a mercados europeos, asiáticos y de Estados Unidos.

Las graves condiciones sociales, el escaso crecimiento económico y el elevado déficit en la balanza comercial suceden en condiciones de mayores ingresos estatales en concepto de impuestos. Honduras tiene la más alta carga impositiva de Centroamérica. En el año 2017 percibió en concepto de impuestos el 18.5% de su PIB, mientras en Nicaragua la carga impositiva es del 16.2%, en El Salvador 15.8%, Costa Rica 13.4%, Guatemala 10.2%, y Panamá 9.5%.

Teniendo la carga tributaria más elevada, el gasto público en materia social está reduciéndose. En el año 2013 fue del 50% del presupuesto general de la República, y en 2016 fue de 37%. En el año 2016, en Guatemala fue de 58%, en Nicaragua 55%, en Panamá 50%, Costa Rica 49% y El Salvador 48%. Por otra parte, la tendencia en los demás

7 SECMCA y proyección de CEPAL.

8 SECMCA y Banco Central de Honduras.

9 CEPALSAT

países centroamericanos ha sido al alza del gasto social, mientras en Honduras el gobierno asume la tendencia inversa.¹⁰

Con mayores ingresos que hace pocos años y reduciendo el gasto social, el Estado está debilitándose. El debilitamiento del Estado –diferente a la reducción del mismo– tiene dos indicadores principales: la incapacidad de las instituciones para gestionar el interés público de manera que solvente en la manera más eficaz los problemas de las mayorías, y la falta o insuficiencia de sometimiento del Estado, su gobernante, diputados y todos los funcionarios y empleados públicos, al imperio de la Constitución de la República y las leyes.

En su conjunto, las cifras y datos arriba proporcionadas muestran la incapacidad institucional del Estado para gestionar lo público. En cuanto al segundo indicador, de acuerdo con un índice internacional para medir el grado de existencia del Estado de Derecho en los países, de un puntaje de 1, Honduras tiene 0.40, mientras Nicaragua 0.43, Guatemala 0.44, El Salvador 0.48, Panamá 0.58 y Costa Rica 0.68. De la región latinoamericana Honduras ocupa la posición 28/30 y en dimensión global, la posición 103/113.¹¹

Un Estado débil es el caldo de cultivo para que la corrupción alcance niveles imprevistos. Habiendo sido debilitado, el Estado de Honduras pierde la capacidad de protegerse a sí mismo y sancionar los delitos cometidos por los poderosos. Entonces se produce la impunidad. En términos estructurales, se da una relación de reforzamiento recíproco, en la cual la corrupción genera impunidad, y esta a su vez posibilita más corrupción, dando lugar a un círculo vicioso que todavía no tiene fin. Siendo difícil medir los montos de la corrupción, hay datos estimados, según los cuales al año 2015 esta, en sus casos más emblemáticos, alcanzó un monto de US\$ 367.1 millones, que equivale al 4.3% del PIB. Se calcula que el dinero perdido por el Estado en los casos emblemáticos de corrupción, le hubiese permitido quintuplicar el presupuesto de 2015 de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, o más que duplicar el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, o duplicar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad. Las pérdidas del Estado a causa de la corrupción e impunidad en los casos emblemáticos hasta el año 2015, equivalen al 70% del presupuesto del año 2015 de la Secretaría de Salud, o al 35% del presupuesto del mismo año, de la Secretaría de Educación.¹²

10 DATAIGUALDAD de Oxfam, Icefi y Latindadd.

11 *World Justice Project Rule of Law Index*.

12 Icefi, con base en información del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, estudios de caso y registros noticiosos.

Más allá de lo que se expresa en cifras, hay condiciones intangibles que han caracterizado la interacción social y hoy se han perdido o están muy debilitadas, empeorando con ello la vida de las personas. La protección, asistencia, apoyo mutuo, acompañamiento, afecto, consejo y guía han sido condiciones comunes al interior de las familias, no solo en las familias nucleares, sino en la familia extendida, en el campo y la ciudad. Las redes sociales que han existido inveteradamente, y en las que participan familiares, amigos, vecinos, son estructuras de solidaridad y apoyo decisivas por su carácter integrador, identitario, que contribuyen a fortalecer la estima propia de cada miembro, evitando o solventando muy diversos problemas de cada uno y fortaleciendo la convivencia. Estas redes se han debilitado, por múltiples razones, y con su debilitamiento las personas se encuentran más abandonadas a sus soledades y posibilidades individuales.

PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN SOBRE LA REALIDAD NACIONAL

Las percepciones o creencias de las personas acerca de los distintos aspectos de la realidad nacional están en gran parte determinadas por las condiciones en que viven y por la influencia del ambiente económico-social al que pertenecen. Los medios de comunicación y las redes sociales, con su capacidad de persuasión, también contribuyen a darles forma. Es por ello de esperar que quienes se benefician del actual estado de cosas tengan una percepción favorable de la realidad, mientras muchos de los que enfrentan vulnerabilidades, carencias o exclusiones asuman una perspectiva contestataria o de oposición.

La percepción de los hondureños sobre la actual situación económica del país es desfavorable. El 75.6% de la población cree que es muy mala o mala; 16.3% creen que es regular y 7.9% creen que es muy buena o buena. (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ (2018). Percepciones sobre la situación hondureña del año 2017.

La desocupación laboral, la inseguridad y la corrupción en la gestión de lo público son percibidos por la ciudadanía como los problemas más importantes de la sociedad hondureña. Desocupación/desempleo es el problema principal para el 29.7% de la muestra investigada; delincuencia/seguridad pública: 29.3%; corrupción: 7.9% (datos de Latinobarómetro 2016)

En materia de corrupción, en una escala de 0 a 100, en la cual 0 es la percepción de altos niveles de corrupción y 100 es la percepción de bajos niveles, el índice de percepción de la corrupción de Honduras en el año 2017 es de 29, mientras Guatemala tiene 28, El Salvador 33, Nicaragua 26, Costa Rica 59 y Panamá 37. El índice promedio de América Latina es 41.9, y de manera global, los países con menor

percepción de corrupción son Nueva Zelanda, 89, y Dinamarca, 88. (Icefi con base en Transparencia Internacional 2018, *Corruption perceptions Index* 2017).

Sobre el grado de corrupción del presidente y sus funcionarios, el 22% cree que todos son corruptos, el 27% que casi todos, el 31 % que algunos, el 10% no sabe y 10% que ninguno. (Latinobarómetro 2016). Respecto al Poder Judicial, el 22% de la población cree que todos los jueces y magistrados son corruptos, 18% que casi todos, 38% que algunos, 13% no sabe y 9% que ninguno. (Latinobarómetro 2016). Respecto a la confianza en el Congreso Nacional, 46% no tiene ninguna, 33% tiene poca, 15% tiene algo y 5% mucha. Respecto a los empresarios, el 43.4% de la población cree que algunos son corruptos, 18.5% cree que casi todos, 16% que todos, 12% no sabe y 8% que ninguno. (Latinobarómetro 2016)

El 49% de la población hondureña tiene confianza en la democracia como la mejor forma de gobierno; este porcentaje es solo superado en Centroamérica por Costa Rica, 64% y ligeramente por Panamá, 50%. (CEPALSTAT). Sin embargo solo el 13% de la población está satisfecha con el funcionamiento actual de la democracia, mientras el 25% está no muy satisfecho y el 43% nada satisfecho. Respecto al gobierno, el 27% tiene poca confianza en él, y el 49% no le tiene ninguna confianza, (Latinobarómetro 2016). El 79% de la población desconfía de las instituciones políticas y del Estado (CEPALSTAT).

CONTEXTO POLÍTICO EN QUE SE HA GESTADO LA CONDICIÓN ACTUAL DE HONDURAS

El contexto político en que se ha ido conformando la actual situación de Honduras es complejo y nada lineal. Está caracterizado por algunos avances y mayores retrocesos en la transición democrática. Las graves condiciones actuales tienen determinantes estructurales y coyunturales. El modo de producción propio del capitalismo dependiente, con su subordinación externa, más el autoritarismo con que se ejerce el poder y la voracidad de las élites económico-políticas, que a través de los distintos gobiernos han controlado el Estado, son factores decisivos.

La transición a la democracia se inició de manera formal en el año 1982. En ese año los militares salieron formalmente del control del Estado, la Asamblea Nacional Constituyente decretó una nueva Constitución de la República, que con innumerables reformas se mantiene vigente; convocó además dicha Asamblea a elecciones generales en tres niveles electivos: Presidente de la República, 128 diputados que integran el Congreso Nacional y 273 gobiernos municipales. Con

la llegada al poder de los electos en tal proceso, Honduras “retornó al orden constitucional”.¹³

Lo acontecido a lo largo de la transición permite identificar cinco etapas de la misma. Cada etapa representa un momento diferente, sin que el arribar a una nueva signifique que ha sido superada la etapa anterior. Las relaciones económico-sociales y políticas muestran cambios entre una etapa y otra, pero en lo esencial hay una constante en los treinta y seis años de transición democrática: el ejercicio patrimonial y autoritario del poder. Las cinco etapas identificadas son:

PRIMERA ETAPA: HONDURAS EN EL CONFLICTO CENTROAMERICANO

Los gobiernos de Honduras, desde el establecimiento de las empresas bananeras, a principios del siglo XX, se han mantenido de manera constante, supeditados a la política regional de los Estados Unidos. Ello lo llevó, en el período 1980 - 1990 a dar su apoyo a la contra-revolución nicaragüense, y a la acción anti guerrillera y anti insurreccional en El Salvador y Guatemala. Al instaurarse el gobierno resultante de las elecciones de 1982, el Congreso Nacional y la Presidencia de la República continuaron con la estrategia de contención regional de las izquierdas, decidida por el gobierno de los Estados Unidos y ejecutada en Honduras por los gobiernos militares previos, en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional. La posición hondureña en la crisis regional generó oposición de diversos sectores nacionales, por lo que, durante el primer gobierno de transición democrática se sucedió un fuerte proceso de represión interna, dirigida contra la población disidente. Se sucedieron con ello graves violaciones de derechos humanos. Esta etapa empezó a ceder a fines de la década de 1980, con las elecciones en Nicaragua, quedando definitivamente cerrada a principios de la década de 1990, con los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador

La década de 1980 en Honduras fue un período determinante sobre el futuro del país. En esos diez años, referidos en el contexto internacional como “la década perdida”, se desencadenaron procesos y acontecimientos clave en el cambio de rumbo de la economía y la política. Los más influyentes fueron: a) la ocupación militar por el ejército de los Estados Unidos y con este, por los contra revolucionarios nicaragüenses, aceptada de manera complaciente por los gobiernos hondureños; b) el inicio de la transición a la democracia, con el desplazamiento de los gobiernos militares de facto; c) la orientación

13 Esta fue una expresión de la época, usada por los dos partidos tradicionales, Liberal y Nacional, para referirse a la terminación formal de los gobiernos militares de facto.

neoliberal del Estado y la economía, que sepultó de manera temprana al Estado de bienestar y al reformismo militar de la década anterior; d) la transformación de la inversión capitalista transnacional en empresas maquiladoras con sus capitales “golondrinas” que demandan y logran amplísimos regímenes de excepción fiscal y zonas francas, en las cuales no se aplicó la legislación laboral.

Por otra parte, a mediados de aquella década y en la siguiente se sucedió el retroceso y posterior desbandada de los movimientos revolucionarios. Las incipientes y poco arraigadas organizaciones partidarias de la lucha armada del pueblo, y aún el veterano Partido Comunista con su estrategia de avance por etapas desde la “democracia burguesa”, enfrentaron condiciones adversas, que los fueron debilitando hasta su desarticulación. La represión contra dirigentes y militantes de izquierda, ejecutada mediante acciones de tortura, desaparición y asesinato, los obligó a reducir su accionar y marchar al exilio. Pero la represión no se limitó solo a los militantes de izquierda. Incluyó a cualquier persona que simpatizara con la justicia social y las causas progresistas. Se creó un ambiente de intimidación general de la población y un clima de sospecha y delación, todo en el marco de la doctrina de la seguridad nacional.

SEGUNDA ETAPA: LA IMPLANTACIÓN DEL NEOLIBERALISMO Y LA REFORMA DEL ESTADO

El neoliberalismo, que se viene ejecutando en Honduras desde la década de 1980, avanzó de manera considerable en la aplicación de sus estrategias, planes y proyectos a partir de la década de 1990. Son diversas las acciones económicas y políticas encaminadas a la reducción del Estado, privatizaciones y traslado de responsabilidades públicas al sector privado, con la consecuente conversión de bienes públicos en mercancías. Se minimizó la función reguladora del Estado, se desprotegieron y sometieron las relaciones laborales y sociales a condiciones de mercado. Se produjo una reducción severa de los derechos económico-sociales de la ciudadanía. Estas prácticas económicas, ya de por sí perjudiciales a la nación, se han ejecutado bajo dos características que provocan aún más daño: de una parte las privatizaciones tienden a darse bajo condiciones de corrupción, y por otra parte, el mercado ya erigido en el gran ente regulador de la vida no solo económica, sino además social, no es libre, sino oligopólico y monopólico, afectándose por esta vía derechos y condiciones de vida de la población vulnerable, que es la inmensa mayoría.

También se inició la apertura al libre comercio internacional, con la suscripción del Tratado de libre comercio entre los países de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA).

A principios de la década de 1990, bajo la conducción del tercer presidente constitucional, se emitieron las leyes y se ejecutaron las reformas institucionales que convierten al mercado en una estructura social decisiva, no solo en la economía privada sino en lo público. La reducción de las funciones del Estado y su traslado al mercado se vuelve real y efectiva mediante las privatizaciones de entes públicos, la clausura de la institucionalidad reformista, el desmontaje de la reforma agraria y el abandono de funciones de protección social en áreas como la vivienda.

TERCERA ETAPA: LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL POST HURACÁN MITCH

Este fenómeno natural, ocurrido a finales de octubre de 1998, dio lugar a un encadenamiento de acciones sociales, económicas y políticas. Su impacto lo ubica en la condición de un parte aguas de la vida nacional. Los efectos devastadores del huracán Mitch hicieron evidente ante el mundo la condición de miseria y vulnerabilidad en que vive más de la mitad de la población nacional y dieron lugar a procesos económicos, políticos y sociales simultáneos, como: a) el surgimiento de un alto grado de cohesión y solidaridad ciudadana ante la devastación del país; b) una muy generosa cooperación financiera y técnica por parte de la comunidad internacional; c) un plan de reconstrucción y transformación nacional, concertado entre varias naciones y órganos internacionales cooperantes, el gobierno de Honduras y la sociedad civil; d) la condonación de un elevado porcentaje de la deuda externa; e) la ejecución de una Estrategia de Reducción de la Pobreza. Pese a estos factores, más temprano que tarde se evidenció el fracaso de la reconstrucción con transformación nacional, atribuible en gran medida a la ineficiencia y corrupción del sector público. Luego se produjo el descrédito y fracaso de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, atribuible a similares causas. Las consecuencias más notorias de esta etapa fueron: la pérdida de una oportunidad valiosísima para avanzar de manera considerable en la construcción de una sociedad equitativa y democrática; el descrédito internacional; la pérdida de confianza de la población hacia el Estado y la democracia; el incremento de la conflictividad político social. Esta etapa se extendió desde noviembre de 1998 hasta el primer semestre del 2009.

CUARTA ETAPA: EL GOLPE DE ESTADO DE 2009 Y LA SITUACIÓN ECONÓMICO-POLÍTICA POST GOLPE

El deterioro económico social post Mitch y las frustraciones políticas que tal deterioro generaba fueron abriendo espacios propicios para

un liderazgo menos convencional, que comunicara esperanza a la mayoría de los hondureños pobres y vulnerables. En ese contexto y sin generar grandes expectativas sociales, el candidato liberal Manuel Zelaya Rosales ganó las elecciones con un margen muy estrecho y fue investido Presidente de la República en enero de 2006. Zelaya en el poder fue acercando su discurso a las demandas populares y aprobó algunas medidas de beneficio social inmediato, que no tenían precedente en los gobiernos de la transición. En la dimensión internacional ejerció acciones soberanas que en el contexto conservador lucieron inapropiadas. En política actuó con ánimo de continuar en la Presidencia de la República al término de su período de cuatro años, mediante reforma de los artículos “pétreos” de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial. Algunas de sus decisiones económico políticas evidenciaron que Zelaya estaba saliéndose del control de la élite hegemónica. Todo esto generó desconfianza y oposición de influyentes grupos fácticos, al igual que de los políticos más conservadores y de las cúpulas militares y religiosas. Estos grupos, faltando solo seis meses para la conclusión del mandato de Zelaya, dieron un golpe de Estado, el primero en 27 años de transición. Con el golpe se abrió la cuarta etapa. Esta etapa se inició con incertidumbre sobre el futuro de la democratización, pues el golpe erosionó más la débil confianza social hacia la democracia. Después de transcurridos diez años del golpe ha habido tres procesos electorales. Como consecuencia del golpe de Estado se ha reconfigurado el panorama político nacional con el apareamiento de nuevas e imprevistas fuerzas de signo anti golpista, que han alcanzado amplia popularidad y significativo caudal electoral. También en estos años se han reconstruido casi todas las relaciones internacionales perdidas a causa del golpe.

QUINTA ETAPA: FRAUDE ELECTORAL E IMPOSICIÓN REELECCIONISTA

El segundo gobierno electo después del golpe de Estado concluyó su mandato en enero de 2018. Su presidente se caracterizó por: a) el ejercicio autoritario del poder; b) la represión contra opositores y críticos; c) la cooptación de políticos de oposición y dirigentes de sociedad civil; d) el control político de los poderes judicial y legislativo; e) el más pleno sometimiento a las directrices del gobierno estadounidense; f) la búsqueda permanente de la aprobación política de las Fuerzas Armadas de Honduras. Muchos funcionarios y empleados de gobierno, en todos los niveles resultaron implicados en actos de corrupción y en acciones de colaboración con el narcotráfico y el crimen organizado. En sus cuatro años de mandato aumentaron los índices de pobreza, corrupción, inseguridad y otros.

En el año 2015 desde el poder se iniciaron acciones políticas para invalidar la prohibición constitucional a la reelección presidencial. Este asunto se resolvió con una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaraba inconstitucional la Constitución de la República en las partes que prohíben y sancionan la reelección del presidente de la República. Esta sentencia fue apoyada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos u ombudsman y por el Ministerio Público. Con base en tal sentencia, el presidente lanzó su inconstitucional candidatura y fue a elecciones en noviembre de 2017.

Las elecciones fueron consideradas fraudulentas por diversos sectores nacionales y observadores internacionales. La comisión de observación de la OEA concluyó que era imposible establecer un ganador, y en virtud de tal situación recomendaba la repetición de las mismas. Amplios sectores en todo el país han realizado actos de protesta contra el fraude y la respuesta oficial ha sido la represión.

El reconocimiento dado por el gobierno de los Estados Unidos a los resultados electorales oficiales constituyó el visto bueno imperial a la reelección. Después de ello vinieron los reconocimientos de otros países y organismos internacionales, y el inicio del nuevo mandato por reelección inconstitucional.

La reelección, el fraude electoral y la represión contra los sectores populares en resistencia han incrementado el clima de polarización en la sociedad hondureña. Este ambiente de hostilidad genera mayores condiciones de ingobernabilidad. Tal contexto el gobierno es inestable. La espada de Damocles pende de un hilo sobre los funcionarios de gobierno, pues las referidas muestras de apoyo no impedirían que en determinado momento Washington solicite la extradición de funcionarios del más alto nivel del gobierno hondureño que resulten vinculados a las redes del narcotráfico.

En los treinta y siete años de transición democrática reseñados, Honduras ha tenido dos oportunidades históricas de cambiar su rumbo y avanzar por vías diferentes. La primera se dio con el proceso de reconstrucción y transformación nacional que siguió al huracán Mitch. La segunda se abrió con la reconstrucción democrática post golpe. Ambas oportunidades han sido desperdiciadas en su casi totalidad. La razón más decisiva para ello es que la élite hegemónica –que aún no se ha modernizado lo suficiente- se aferra a sus condiciones de privilegios exclusivos, con una estrecha y errónea visión, que la limita e impide el avance del país. En estas condiciones es persistente el retroceso de la democracia y la transformación social.

LA PRESENTE ANTOLOGÍA

Esta antología recopila estudios en perspectiva crítica, para aportar a una interpretación racional y objetiva de la realidad de Honduras en los últimos cincuenta años. Los trabajos aquí reunidos han sido formulados desde muy diversos enfoques, con un denominador común: diferenciarse de aquella interpretación convencional de los fenómenos y procesos que cumple funciones de justificación del statu quo y suele circunscribirse al discurso oficial. Se han reunido veintidós trabajos, agrupados como una pluralidad de discursos cuestionadores y propositivos.

Los trabajos no están presentados en un orden cronológico, sino en uno sistemático. Se han agrupado en tres secciones: Dinámica del poder; Sociedad, economía y desarrollo; y Pensar la nación. Los textos de la primera sección refieren desde la crisis centroamericana y el inicio de la transición democrática, hasta el momento presente. La segunda sección incluye trabajos de los años sesenta y setenta del siglo anterior, junto con aportes actuales. En la sección tercera, los textos abarcan igual período.

El trabajo de Ventura Ramos fue publicado en 1987, en medio de la crisis centroamericana. En él se interpreta el conflicto como una guerra de los Estados Unidos contra los pueblos de Centroamérica; se identifica la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional como instrumento teórico y estratégico de esa guerra; se refieren las tácticas de guerra psicológica, represión generalizada y desaparición selectiva de líderes populares de Honduras, en un contexto de menosprecio de la soberanía nacional por los propios gobiernos hondureños de la época.

Víctor Meza escribió en 1988 *Los militares hondureños en la hora de Washington*. En él analiza la agenda impuesta por los Estados Unidos a los militares hondureños en los años de la crisis centroamericana, y los mecanismos de subordinación de estos hacia el país del norte.

En su trabajo de 1990, Margarita Oseguera de Ochoa estudia los movimientos o fuerzas sociales nacionales en el contexto de la crisis regional, identificando rasgos ideológicos y perspectivas.

Breny Mendoza, en su estudio de 1996, que forma parte de un trabajo suyo más amplio, hace un análisis de la política hondureña en perspectiva feminista. Estudia además las implicaciones que la politización trae consigo para las mujeres de diferentes estratos y condiciones.

Política, políticos y dependencia externa es un trabajo de Víctor Meza, del año 2010, en el cual se esboza un retrato de los políticos hondureños, en perspectiva histórica, desde principios del siglo XX, en su relación de dependencia y subordinación respecto al poder de los Estados Unidos.

Leticia Salomón, en su estudio del año 2010 sobre el golpe de Estado del 2009 analiza este golpe en perfil amplio. Identifica el contexto del mismo y los actores involucrados, las justificaciones abiertas y veladas que asumieron los perpetradores del golpe, y las consecuencias de este golpe de Estado sobre la transición democrática.

El trabajo de Eugenio Sosa, de 2017, da cuenta de cómo la transformación del modelo económico implica la sustitución de unos grupos económicos por otros en la integración de la elite de poder. Muestra como tal sustitución ha provocado a la vez la inclusión de nuevos políticos dentro de la referida elite, y con ello se han provocado transformaciones significativas dentro del Estado, con impactos en términos de avance o retroceso en la construcción de la democracia.

Marvin Barahona presenta el trabajo de más fresca tinta en esta Antología. Su estudio, de 2018, es un análisis socio-lingüístico del discurso de toma de posesión del mandatario actual, a través del cual identifica una retórica oficial cargada de cinismo, arbitrariedad e intolerancia. De esta retórica se infiere la continuidad de las prácticas autoritarias en el actual gobierno.

El aporte de Miguel Ángel Rivera, de 1967, es un documento formulado en su condición de funcionario de gobierno. En él llama la atención del gobernante sobre la necesidad de adecuar la acción del Estado a la planificación del desarrollo económico. El trasfondo del documento es la lucha entre la perspectiva moderna, planificadora y desarrollista, enfrentada al tradicionalismo político, patrimonialista y clientelar.

El trabajo de Rafael Del Cid escrito en 1975 es una aproximación a las clases sociales en el agro hondureño. Escrito en la misma época en que el gobierno reformista de las Fuerzas Armadas había lanzado su Plan Nacional de Desarrollo, cuya médula era la reforma agraria, y mientras los terratenientes tradicionales lanzaban su ofensiva contra el reformismo, este trabajo es útil para contextualizar aquellos procesos.

La conferencia de Jorge Arturo Reina, pronunciada en 1976, en el mismo contexto de enfrentamiento político entre partidarios y opositores de la reforma agraria, contiene una argumentación en defensa la reforma agraria y el Plan Nacional de Desarrollo, invocando el interés general de la nación.

De Rigoberto Sandoval Corea se incluye un documento publicado en 1976, siendo director del Instituto Nacional Agrario, que constituye una defensa de la reforma agraria desde dentro del Estado, formulada en momentos en que el reformismo está arriando banderas y el contra reformismo tradicional empieza a emerger como triunfador. Sus argumentos en favor de la reforma agraria, se enfilan a denunciar la

acción indebida de la oligarquía terrateniente para hacer fracasar la reforma agraria, con grave perjuicio a la nación.

El trabajo de Mario Posas, de 2014, hace un recorrido histórico en el tema de movimientos sociales. Caracteriza los viejos movimientos, centrados en el sindicalismo y las luchas agrarias, y los más recientes, con motivos diferentes, que ocupan espacios significativos en la sociedad nacional. Entre estos, hace referencia al Frente Nacional de Resistencia Popular, surgido en respuesta al golpe de Estado de 2009. Con este aporte se muestran los vínculos entre el pasado y el presente de los movimientos sociales.

Darío Euraque, en su trabajo del 2004, enfoca un tema inédito y tenido como tabú en la sociedad hondureña: masculinidad y homofobia. Explora, en el contexto de una acusación política, a mediados del siglo XX, la presencia de masculinidades en conflicto, evidenciando el predominio de una de tipo patriarcal y excluyente, que forma parte del discurso ideológico dominante.

El trabajo de Ricardo Puerta, de 2013, muestra un panorama amplio sobre el fenómeno de la migración hondureña a Estados Unidos. Analiza causas, impactos económicos y sociales de la migración en la sociedad hondureña, características de la población que emigra, y la intervención del Estado de Honduras en este asunto.

Hugo Noé Pino, Wilfredo Díaz y Claudio Salgado, con su trabajo de 2017 sobre efectos de la política fiscal actual, entran en la explicación fundamentada sobre la escasa efectividad de dicha política. La limitada aplicación de recursos a las áreas sociales y las perspectivas asumidas en el abordaje de lo social resultan parte de un mismo fenómeno: una política fiscal en materia social que no se corresponde con las necesidades y requerimientos sociales.

El aporte de Rigoberto Ochoa, de 2010, es un análisis, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre las condiciones de gobernabilidad democrática, gestión de la conflictividad social y eficacia de la institucionalidad del Estado para articular intereses sociales, desde la década de 1980 hasta los meses posteriores al golpe de Estado de 2009.

El trabajo de Roberto Castillo hace referencia a la necesidad de despertar la conciencia teórica centroamericana. Propone para ello elaborar pensamiento a partir de la tradición propia, crear libros esenciales, que alumbren la vida intelectual y, desde la conciencia fortalecida sobre lo propio, ejercer la crítica de procesos e instituciones fundamentales para la nación.

Gustavo Zelaya, con su trabajo del año 2016, propone que los aportes a la identidad latinoamericana de hoy provengan de los movimientos sociales que pugnan por nuevos espacios democráticos en

América Latina. Señala la relevancia del feminismo como movimiento identitario y reconoce que las raíces teóricas y estratégicas de la identidad latinoamericana están en el legado de Bolívar, Morazán, Martí y otros héroes y próceres altamente significativos en nuestra historia.

En su trabajo, de 1990, Mario Argueta asume que la identidad nacional hondureña va siendo construida por el pueblo a partir de gestas de defensa de la nación, con las que la ciudadanía está profundamente identificada. Analiza tres acontecimientos que han generado profunda unidad e identificación nacional en el siglo XX: la reacción contra la invasión de los marines norteamericanos, en 1924; la huelga bananera de 1954 y la guerra con El Salvador, en 1969.

El trabajo de Ramón Romero, de 1990, propone una reformulación de las ideas sobre identidad nacional. Argumenta que la identidad de nación se asienta con mayor legitimidad en las aspiraciones sociales de futuro. La formulación de un proyecto histórico de nación, que asuma con equidad los intereses diversos de la nación, y logre cohesionar y movilizar a la ciudadanía, es más propio que la identidad centrada en un pasado cargado de opresión, inequidad y discriminación.

Irma Becerra, en su trabajo del año 2011, señala la relevancia del concepto de formación económico social, para mejor entender y transformar nuestra realidad. Sobre esa base propone características de una formación económico social alternativa latinoamericanista y socialista, para la América Latina de hoy, fundada en los ideales, la ética y la praxis de los libertadores, unionistas y forjadores de la patria grande latinoamericana.

